

LA RUTA QUE CAMBIA LA GEOGRAFÍA DEL CHACO

**Marcos Glauser, Luis María de la Cruz
y Miguel Ángel Alarcón**

INICIATIVA AMOTOCODIE

El avance de la Ruta Bioceánica en Paraguay ya no es una promesa de integración regional: es una realidad que avanza a toda velocidad sobre el corazón del Chaco. Diseñada para unir los intereses económicos y comerciales de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile con los de los países asiáticos, la megaobra es presentada como motor de desarrollo, reducción de costos logísticos y puerta de entrada a los mercados de Oriente. En el terreno, sus efectos son mucho más complejos y contradictorios.

En Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, las obras del puente internacional con Porto Murtinho (Brasil) están en su etapa final. Este puente, junto con el que unirá a Paraguay con Argentina en Pozo Hondo, es una de las piezas clave para transformar al Chaco en un corredor estratégico para exportaciones de soja, carne y otros commodities, permitiendo que la producción salga hacia puertos chilenos en tiempos récord. La promesa de crecimiento, sin embargo, viene acompañada de profundas tensiones territoriales, ambientales y sociales, que golpean sobre todo a las comunidades indígenas.

EL “PROGRESO” PROMETIDO POR LA RUTA BIOCEÁNICA LLEGA CON ESPECULACIÓN DE TIERRAS, DEFORESTACIÓN Y RIESGOS SOCIALES QUE GOLPEAN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

El primer caso significativo es el del pueblo Ayoreo, de Puerto María Auxiliadora (PMA). Allí, 18 comunidades (que reúnen aproximadamente al 30% de la población ayoreo del Paraguay) ven cómo la ruta y el boom inmobiliario, se expanden hasta los límites de sus tierras comunitarias, generando amenazas directas a su territorio, sus recursos y su forma de vida.

Un territorio bajo presión

La propiedad de las comunidades de PMA tiene 18.000 hectáreas, y se extiende apenas cuatro kilómetros desde la ruta hacia el sur, lo que significa que la totalidad de su territorio se encuentra dentro de la franja de impacto directo de la obra vial. A esto se suma la proyección de nuevas rutas transversales, centros logísticos, canteras y proyectos agrícolas de gran escala, que buscan instalarse en la región, especialmente orientados a la producción de soja y algodón.

El aumento del valor inmobiliario ha disparado intentos de usurpación y venta de tierras y bosques utilizados por el pueblo ayoreo, incentivando un mercado especulativo que amenaza con fragmentar aún más a las comunidades. Paralelamente, la deforestación avanza, destruyendo hábitats vitales para la recolección de plantas medicinales, tintas y fibras utilizadas por las mujeres en su producción artesanal y desarrollo de su arte textil.

El espejismo del progreso

El discurso oficial resalta las oportunidades económicas que traerá la Ruta Bioceánica: empleo, comercio, inversión extranjera. Sin embargo, las comunidades indígenas se preguntan quiénes serán realmente los beneficiarios. Hasta ahora, gran parte de los empleos en la construcción del puente han sido temporales y precarios, mientras que el ingreso de trabajadores foráneos ha impulsado problemas como la prostitución de mujeres jóvenes y niñas, incrementando riesgos de violencia y enfermedades de transmisión sexual.

Frente a este panorama, el desafío no es menor ¿Cómo garantizar que el desarrollo no arrase con las comunidades que habitan históricamente el territorio? ¿Qué papel tienen las instituciones estatales para proteger sus derechos? ¿Qué futuro espera a los pueblos que ven sus formas de vida amenazadas por un modelo extractivista que no reconoce límites?

IMPACTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y DE GÉNERO

La Ruta Bioceánica no es solo una obra de ingeniería: es una fuerza transformadora que está reconfigurando el paisaje físico y social del Chaco paraguayo. En Puerto María Auxiliadora, las comunidades ayoreo experimentan estos cambios de manera directa, cotidiana y muchas veces dolorosa.

Fragmentación de liderazgos y pérdida de gobernanza comunitaria

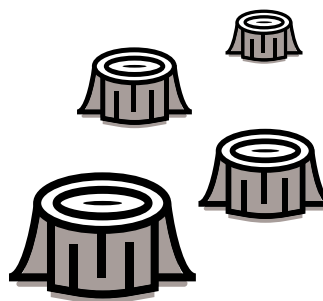
Uno de los efectos más preocupantes es la crisis de liderazgo dentro de las comunidades. El modelo tradicional, basado en la representatividad de líderes que mediaban entre la comunidad y el mundo exterior, se ve desplazado por nuevos modelos de gestión y nuevos líderes cooptados por intereses económicos y políticos externos. Estos acuerdos, lejos de beneficiar a la población, consolidan negocios inmobiliarios, concesiones de canteras y proyectos extractivistas que afectan el territorio ancestral.

El resultado es la pérdida de contacto entre líderes y bases comunitarias, debilitando los mecanismos de consulta previa, libre e informada, que la legislación y los estándares internacionales exigen para cualquier intervención en territorios indígenas. En la práctica, las decisiones sobre el futuro del territorio se atomizan, a riesgo de la pérdida de su integridad.

Retroceso en las relaciones de género

La presión territorial y la crisis de liderazgos tienen un correlato directo en las relaciones de género. En la organización social tradicional ayoreo, la matrilocalidad aseguraba a las mujeres un papel central en la toma de decisiones y las protegía frente a situaciones de violencia. Pero en los últimos años, este sistema se ha visto erosionado: las mujeres son excluidas de las reuniones y relegadas al ámbito doméstico, perdiendo su capacidad de influencia en asuntos críticos para la vida comunitaria.

La violencia simbólica y estructural se combina con riesgos más graves: la prostitución de niñas y adolescentes, alimentada por la llegada masiva de trabajadores de la construcción y nuevos habitantes atraídos por la promesa de negocios. Este fenómeno ha derivado en la aparición de enfermedades de transmisión sexual antes desconocidas en la zona, como el VIH, lo que agrava la crisis social y sanitaria.



Deforestación y pérdida de biodiversidad

El impacto ambiental es igualmente alarmante. La expansión de la frontera agropecuaria y la instalación de canteras, han provocado una acelerada deforestación, afectando bosques que son fuente de plantas medicinales y fibras utilizadas en la producción textil. La desaparición de especies clave, no solo compromete la biodiversidad, sino también el sustento económico y cultural de las comunidades, especialmente de las mujeres que lideran la producción de tejidos y artesanías.

Las comunidades han empezado a responder con pequeñas iniciativas de cultivo de especies nativas, pero la escala del problema supera ampliamente sus capacidades. Mientras tanto, la construcción de rutas transversales y nuevos proyectos logísticos, amenaza con fragmentar aún más los ecosistemas.

El peso de la soja y el modelo extractivista

El corredor no se explica sin el modelo productivo que lo sostiene: la expansión sojera y el agronegocio. La promesa de Paraguay de posicionarse como un nodo logístico global, se ha transformado en pocos meses en el deseo de posicionarse como partícipe de la producción extractivista exportadora. Esto implica la conversión masiva de áreas de pastoreo y monte nativo, en plantaciones agrícolas especialmente de soja y algodón, acompañadas del uso intensivo de agroquímicos.

Este cambio no solo altera el paisaje y contamina el suelo y el agua, sino que genera un efecto cascada sobre la vida de las comunidades: pérdida de acceso a recursos, riesgos de salud pública y desplazamiento de las actividades tradicionales que garantizan la subsistencia y la transmisión cultural. Finalmente, hay pérdida de control sobre el territorio y sobre la propia organización social y autonomía, como efectos acumulativos no ponderados en ninguna evaluación de impacto y ausente en cualquier plan de gestión a largo plazo.

RESILIENCIA COMUNITARIA Y REFLEXIÓN CRÍTICA

A pesar del escenario adverso, las comunidades de Puerto María Auxiliadora no permanecen inmóviles. Han trazado un plan de acción que busca defender sus derechos, revitalizar su cultura y articularse con otros pueblos indígenas del Chaco y de la región. El objetivo es doble: frenar las amenazas más urgentes y construir una base de resiliencia que les permita enfrentar los cambios a largo plazo.

Estrategias de resistencia

Las iniciativas comunitarias se centran en cuatro ejes:

- ♦ **Reintegración social y productiva** de niñas y adolescentes expuestas a la trata y prostitución, mediante talleres de artesanía, producción textil y transmisión de saberes tradicionales.
- ♦ **Fortalecimiento del liderazgo femenino** en la toma de decisiones, buscando recuperar el rol político que históricamente les correspondía dentro de la estructura social ayoreo.
- ♦ **Diseño participativo de un plan de uso del territorio** que garantice la sostenibilidad ambiental y el acceso equitativo a los recursos naturales.
- ♦ **Articulación regional e internacional** con otros pueblos indígenas para coordinar estrategias de defensa territorial y denuncia de violaciones de derechos humanos. Estas acciones son acompañadas por organizaciones como Iniciativa Amotocodie, que desde 2016 trabaja junto a las comunidades para monitorear los impactos del corredor y promover procesos de autogestión.

Más allá del asfalto

El discurso oficial insiste en que la Ruta Bioceánica traerá desarrollo, empleo y prosperidad. Pero en el terreno, la pregunta sigue siendo la misma: ¿desarrollo para quién? Hasta ahora, la principal consecuencia ha sido el aumento del valor inmobiliario, la llegada de empresas extractivas y la presión para transformar ecosistemas únicos en enclaves agrícolas e industriales.

La obra avanza sin que exista un plan claro de protección de las comunidades, ni un mecanismo efectivo de consulta previa. Se corre el riesgo de que el progreso se mida en toneladas de soja y kilómetros de asfalto, mientras se ignoran los costos sociales, culturales y ambientales.

**EL PROGRESO SIN JUSTICIA
SOCIAL NI RESPETO POR LOS
DERECHOS INDÍGENAS, NO ES
PROGRESO: ES DESPOJO.**

REFLEXIÓN FINAL

La Ruta Bioceánica encarna un modelo de desarrollo que prioriza la exportación de commodities por sobre la vida de los pueblos y la integridad de los ecosistemas. El caso de Puerto María Auxiliadora es un recordatorio de que el progreso sin justicia social ni respeto por los derechos indígenas, no es progreso: es despojo.

Si Paraguay quiere proyectarse como un actor estratégico en el comercio global, necesita responder una pregunta fundamental: ¿puede haber integración económica sin destrucción cultural y ambiental?

La respuesta, al menos para el pueblo Ayoreo, se juega hoy en el terreno, en la defensa de su territorio, su memoria y su derecho a decidir sobre su propio futuro.